

afirmar que cada elector no entregase, en su momento, los dos sobres inexcusables para el Senado y Congreso y que, luego, sólo uno contuviese papeleta electoral. La comprobación de que la postulada nulidad del resultado del Municipio de Tárrega —Distrito 5.º— Sección 1.ª por haber resultado más votantes que electores figuraban en la lista (art. 78-4 del Real Decreto-Ley), no habría de afectar al resultado final de la elección (art. 75, párr. último) aunque, a los 6 votos reclamados por otros conceptos, se acumulasen, al Partido actor, los 24 de diferencia entre los 9 obtenidos por el mismo en dicho Distrito y los 33 atribuidos al Pacte, cuyo candidato es el discutido, conduce definitivamente a la improsperabilidad de la acción que se está examinando.

CDO.: Que la imperatividad de la norma del núm. 7 del art. 73 del D.-L. 20/1977, obliga a estar a ella a los efectos de costas, una vez rechazados íntegramente los recursos interpuestos.

3345

S. 21 julio 1977. Contencioso - electoral. (Sala 3.ª). Elecciones: Congreso y Senado; inadmisibilidad del recurso; acto de Junta Electoral no recurrido en forma. Poder de postulación; representante de candidatura. Defectos formales; irregularidades no invalidantes. Orense.

Disposiciones estudiadas: art. 82 a) de la Ley Jurisdiccional Contencioso - Administrativa; art. 115-2 de la L. Pro. Adm.; R. D.-Ley de 18 marzo 1977.

La representación de las candidaturas de «Alianza Nacional 18 julio» y Partido Socialista Obrero Español, interpusieron recursos contencioso - electorales impugnando la validez de la elección y proclamación de Diputados y Senadores por el Distrito de Orense.

El T. S. declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto por «Alianza Nacional 18 de julio», y desestima el recurso promovido por la representación del «P.S.O.E.», imponiendo las costas a los recurrentes.

Ponente: Excmo. Sr. D. Diego Espín Cánovas.

CONSIDERANDO: Que en este recurso se impugna la validez de la elección y proclamación de Diputados efectuada por la Junta Electoral Provincial de Orense en fecha 23 junio 1977 por el representante de la Candidatura para el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista Obrero Español don Manuel Cortinas Pérez y asimismo se impugna la actuación de la expresada Junta Electoral Provincial de Orense en relación con las elecciones al Senado por el representante de «Alianza Nacional 18 de julio», don Luis María Villarino Sánchez, siendo necesario examinar separadamente ambas impugnaciones.

CDO.: Que en cuanto a la impugnación del representante del Partido Socialista Obrero Español don Manuel Cortinas Pérez, los representantes de los Partidos Unión del Centro Democrático y Alianza Popular así como el M.º Fiscal, se oponen a las pretensiones del recurrente, alegándose en primer término por la representación de Unión del Centro Democrático la inadmisibilidad del recurso, cuestión que por su carácter ha de ser examinada previamente ya que de prosperar vedaría a esta Sala el conocimiento del recurso, basándose la inadmisibilidad alegada en la falta de poder de postulación en la persona del recurrente don Manuel Cortinas Pérez, ya que si bien el D.-Ley regulador de este proceso concede la legitimación en el mismo a los representantes de las candidaturas proclamadas o concurrentes en el art. 73-3 (R. 1977, 612), a juicio de la parte que alega esta excepción, dicha legitimación reconocida expresamente en la citada norma no implica la concesión del poder de postulación que al no estar regulado expresamente en el proceso electoral, debe regirse por las normas subsidiarias de la Ley Jurisdiccional Contencioso - Administrativa (R. 1956, 1890 y N. Dicc. 18435), cuyo art. 33 exige la postulación por medio de Procurador o Abogado con poder al efecto, situa-

ciones que no se dan en el escrito de interposición del recurso presentado por el citado representante del Partido Socialista Obrero Español ante la Junta Electoral Provincial de Orense fecha 23 junio último pues se interpuso como tal representante de la candidatura, en virtud de poder, pero no como Procurador en virtud de poder para actuar como tal en este proceso.

CDO.: Que la anterior alegación de inadmisibilidad debe rechazarse ya que el R. D.-Ley 20/1977 además de conceder en el art. 73-3 expresamente legitimación para interponer el recurso contencioso - electoral a los representantes de las candidaturas proclamadas o concurrentes en el Distrito, regula la interposición del recurso en su art. 74-1 señalando los requisitos que ha de reunir el escrito de formalización del recurso ante la Junta Electoral Provincial, sin exigir para la postulación ante la Junta ningún otro requisito formal, por lo que hay que entender que el representante de la candidatura, cuya función se configura en el art. 32-4 de la normativa electoral, puede presentar como tal representante el escrito de impugnación con el que se inicia y formaliza el recurso contencioso electoral a que alude el citado art. 74-1 así como también el art. 75-1 que se limita a remitirse al anterior con las modificaciones que establece, entre las que no figura la exigencia de la postulación por medio de Procurador o Abogado al efecto apoderado; pero en el presente caso, el recurrente Partido Socialista Obrero Español además de la impugnación por medio de su representante ya citado ante la Junta Electoral Provincial ha comparecido ante esta Sala por medio de Procurador en virtud de poder al efecto, para sostener el recurso, siendo por tanto convalidada la actuación anterior por lo que es clara la improcedencia de la inadmisión del recurso que se pretende.

CDO.: Que en cuanto al fondo del recurso planteado por el Partido Socialista Obrero Español, éste comprende los siguientes motivos: 1.º Nulidades referentes a la constitución o actuación de las Mesas electorales; 2.º Nulidades dimanantes del acto de la votación; 3.º Nulidades por consecuencia de declarar como válidos votos que deben anularse; 4.º Nulidades resultantes por la anulación de votos con infracción procedimental; y 5.º Nulidades originadas en irregularidades de las actas de escrutinio en las Mesas electorales.

CDO.: Que en el tema de las nulidades originadas por la actuación de las Mesas electorales se denuncia la constitución de varias Mesas en el mismo local con infracción del art. 24-2, pero si bien esta norma al prever la posibilidad de que en una misma Sección se constituya más de una Mesa electoral por el número de electores, al indicar que se constituyan en locales «necesariamente distintos», dicha exigencia hay que interpretarla en el contexto normativo encaminado más bien a que las varias Mesas formen parte de una misma edificación, y a esta exigencia es a la única que refiere el texto el calificativo de «requisito indispensable», e incluso más adelante se observa que tampoco lo es pues si la diseminación de la población aconseja lo contrario ya no es requisito indispensable que las varias Mesas estén situadas en una misma edificación, llegándose a la conclusión de que si bien la norma trata de enmarcar las distintas Mesas con aislamiento pero con conexión unas de otras cuando se refieren a una misma Sección, en definitiva queda al criterio de la Junta de Zona la decisión sobre estas meras variantes de localización de las Mesas sin que el hecho denunciado, que afecta a alguna Sección del Ayuntamiento de la Capital de Orense pueda alterar o hacer peligrar la pureza del sufragio por la que han de velar cada una de las Mesas Constituidas según el propio art. 24-1.

CDO.: Que también en relación con la constitución de las Mesas electorales se impugnan los siguientes puntos: a) existencia de un miembro analfabeto en una Mesa, b) inadmisión de interventores, c) admisión de más de dos interventores de Alianza Popular, d) no adjuntar con el expediente

electoral algunas credenciales y e) ausencia simultánea de la Mesa de dos de sus miembros; impugnaciones que deben rechazarse por las siguientes razones: a) en el primer punto, se alega infracción del art. 25, pero esta impugnación referida tan solo a la Sección 7.ª de Ginzó de Limia y en relación con un adjunto ni afecta a todos los miembros de la Mesa, ni en puridad se acredita que el hecho de estampar la huella dactilar sea debido a analfabetismo pudiendo estar imposibilitado de emplear la mano derecha para firmar el adjunto que no firmó; b) la inadmisión de interventores tan solo en el Distrito 2.º de Blancos y respecto a los de Alianza Popular es evidente que no causó perjuicio alguno al recurrente, que carece de interés legítimo en este punto pues tampoco alega siquiera que tal inadmisión tuviera ninguna trascendencia en el resultado de la elección; c) la admisión de más de dos interventores de Alianza Popular con infracción del art. 50-2 si bien es una irregularidad procedimental no es determinante del resultado de la elección, por lo que conforme al art. 75 último apartado no es causa de nulidad; d) el no adjuntar con el expediente electoral algunas credenciales de los interventores en un total de 42 Mesas, es también irrelevante en cuanto al resultado de la votación, por lo que le sería de aplicación lo expuesto bajo el anterior punto, y además tal omisión no desvirtúa el que las credenciales hayan sido examinadas a presencia de toda la Mesa y por tanto incluso de los representantes del Partido recurrente, sin que tampoco se concrete a qué Partido se refieren las credenciales no remitidas; y e) la ausencia simultánea de la Mesa de los dos adjuntos durante unos minutos a la hora de comer sustituidos por Interventores de distintos Partidos de común acuerdo y con la aprobación del Presidente, caso únicamente referido a la Mesa de Beariz, si bien contradice lo dispuesto en el art. 49-3 no puede alterar el resultado de la votación ni su pureza dada la presencia en todo momento del Presidente y de los interventores, por lo que ninguno de los vicios ahora examinados puede provocar la nulidad ni siquiera parcial en las Mesas a que se refieren.

CDO.: Que el segundo motivo de infracciones alegadas se refieren al acto de la votación y comprenden los siguientes supuestos: a) retraso en la hora de empezar la votación; b) apertura de urna mediada la votación; c) voto de quien no figura en el censo; d) no identificación de votantes; e) eliminación de determinadas papeletas electorales; f) admisión de votos sólo para el Congreso o para el Senado; g) papeletas acompañadas de otros impresos de propaganda; h) admisión indebida de voto por correo; infracciones que han de rechazarse en cuanto no son determinantes de nulidad procedimental ya que, a) el retraso sólo en tres Mesas en la hora fijada para comenzar la votación cuando el número de horas que permaneció abierta la votación, casi todas las legalmente prefijadas, es suficiente para el número de electores censados en pequeños núcleos urbanos, no puede viciar de nulidad, b) ni tampoco el incidente de la apertura de urna mediada la votación en la Sección 3.ª de Esgos, continuando la votación, ya que no consta ni se alega siquiera la causa que originó el incidente que aunque constituya irregularidad en el procedimiento no puede anularlo al no constar ninguna anomalía o fraude ni que se dejara de observar la correcta computación de los votos emitidos, c) ni consta que el voto emitido en Beariz que se impugna no figurarse en el censo; d) ni existe duda sobre la identidad de los votantes en las dos mesas en que se alega pues como ocurre en la de Pedrenda, Sección 1.ª, la presencia del representante del Partido Socialista Obrero Español, hace inviable la alegación de no exigir la presentación del Documento Nacional de Identidad, cuando forma parte de la Mesa, siendo de observar que la presentación de este Documento no es la única posible forma de identificación conforme al art. 53 y que esta prueba de la identidad puede resultar en ciertos casos innecesaria por conocimiento notorio del elector, y en este caso concreto hay que llegar a esta convicción al no haberse formulado reclamación

en el acto por ningún interventor ni elector presente conforme al núm. 2.º del citado precepto; e) ni la inexistencia de papeletas electorales del Frente Democrático de Izquierdas en una mesa de Ribadavia (Distrito 2.º, Sección 1.ª) y en otra de Allariz, puede ocasionar la nulidad que se pretende por su escasísima incidencia, en definitiva en los resultados totales del Distrito, ni está directamente interesado otro partido en la referida omisión por lo que en este punto está falto de legitimación para impugnar; f) ni el cómputo de papeletas de votación sólo del Congreso o del Senado en la Mesa de Beariz, ya que si bien se prescribe la entrega simultánea de ambos sobres en el art. 54-5, nada impide que un elector deje de incluir en uno de los sobres la correspondiente papeleta lo que tiene clara equivalencia de una abstención parcial en cuanto al sobre sin papeleta; g) ni tampoco tiene eficacia anuladora de la papeleta el ir acompañada en su sobre de propaganda impresa que no puede ser indicativa más que de evidente error al incluirla junto a aquella, ni finalmente, h) la admisión de votos por correo, ya que está expresamente regulada en el art. 57-1 por lo que el elector que prevea su ausencia del lugar de su Colegio electoral podrá hacerlo por correo, aunque puede suceder que después se encuentre ya en el lugar de la elección lo que no invalidará su voto emitido por correo impidiendo tan solo que lo pueda emitir personalmente el día de la elección según se previene en el núm. 2 de este precepto, siendo de observar la inconcreción de esta alegación respecto a las personas a que pudiera afectar.

CDO.: Que el tercer motivo de impugnación concierne a los votos declarados válidos por las Mesas Electorales que a juicio del recurrente deben ser anulados por haberse emitido en papeletas de Alianza Popular de modelo distinto al oficial, pero el examen de este motivo demuestra claramente que no se trata de papeletas distintas al modelo oficial, lo que hubiera sido inconcebible ni es lo realmente sucedido, sino que las papeletas a que se refiere este motivo presentan algunas diferencias, como ocurre en Carballino, Distrito 3.º, en que expresamente se consignan las diferencias consistentes en distinta tonalidad y espesor, diferencias que ni la letra ni el espíritu del art. 55 del R. D.-Ley que ordena la confección de modelos oficiales a determinar por Decreto, consiente ya que la finalidad de esta norma claramente expresada es la de que la uniformidad de las papeletas garantice el secreto y pureza de la votación, por lo que pequeñas diferencias resultan inapreciables a los efectos deseados y son inevitables en la impresión de tan gran número de papeletas como requiere una elección nacional, por lo que no pueden estimarse suficientes tales diferencias para determinar la nulidad de votos acerca de cuya libre emisión nada se alega por lo que es procedente declararlos válidos.

CDO.: Que el cuarto motivo de impugnación se basa en infracciones procedimentales determinantes de nulidad según el recurrente por haberse remitido a la Junta Electoral Provincial los votos nulos sin firmar las papeletas o bien por no haberse remitido éstas, supuestos distintos que hay que examinar separadamente y en cuanto a la falta de la firma en numerosas papeletas anuladas, que según el recurrente impiden su confrontación para verificar su nulidad es de tener en cuenta que si bien el art. 64-7 ordena que las papeletas anuladas o reclamadas sean rubricadas por los miembros de la Mesa, el art. 66 regula minuciosamente las operaciones posteriores a la votación, siempre a presencia de los miembros de la Mesa e Interventores hasta hacer entrega de toda la documentación en el Juzgado correspondiente bajo requisitos formales que garantizan la exacta correspondencia de las papeletas entregadas con las anuladas, por lo que este defecto de rúbrica en las papeletas anuladas no puede determinar la nulidad pretendida, al no repercutir en el resultado efectivo de la elección y lo mismo hay que decir del otro supuesto de esta impugnación motivado por la destrucción de una

parte de las papeletas anuladas, pues si bien esta irregularidad es de mayor relieve y podría en algún supuesto determinar la nulidad de la votación en las Mesas afectadas, en el caso presente no ocurre así pues el recurrente no concreta cuáles sean estas papeletas, en su número y es inexcusable la alegación precisa de tal motivo de nulidad que no cabe sustituir por una genérica invocación de nulidad por no firmar o no enviar papeletas nulas sin detallar tales supuestos, bien distintos, y por otra parte es incuestionable la presencia de representantes de la candidatura recurrente en Mesas afectadas por tales defectos procedimentales, que hubieron de ser denunciados en el propio acto del escrutinio consignando el número preciso de tales irregularidades, antes de firmar el acta correspondiente, conforme al art. 66, por lo que no cabe admitir ulteriores reclamaciones en estos casos en virtud del principio que veda ir contra los propios actos, consignado en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 115.2 de la L. Pro. Adm. de 17 julio 1958 (R. 1958, 1258, 1469 y 1504 y R. 1959, 585 y N. Dicc. 24708) de aplicación al procedimiento electoral según el art. 76-5 d) del R. D.-Ley que regula este proceso electoral, debiendo presumirse también que la aquiescencia del Interventor de un Partido a la destrucción de votos no será perjudicial al mismo, o que en todo caso nada podría alegar en favor de la validez de tales papeletas destruidas al no oponerse a dicha destrucción, razones que obligan a rechazar este motivo de impugnación.

CDO.: Que el quinto motivo de impugnación se basa en varios supuestos de irregularidades del acta de escrutinio, a juicio del recurrente determinantes de nulidad, consistentes en: a) inexistencia de acta, b) no coincidencia de datos en las actas respecto a número de votantes, c) no coincidencia de los datos electorales respecto al número de papeletas para el Congreso y el Senado, d) no figurar el número de votos; impugnaciones que no pueden ser estimadas ya que, (a) la falta de acta que se denuncia en tres mesas se refiere a Avión (Sección 4.ª) en que a falta del acta se presenta certificación del escrutinio firmada por el Presidente de Mesa, a la que se dio lectura, según el acta del escrutinio general supuesto expresamente previsto en el art. 68-2; en la Mesa de Pereiro de Aguiar (Distrito 2.º, Sección 3.ª) la impugnación no alude más que a la falta de copia literal del acta, pero como se ha indicado es posible el certificado en forma sobre cuya inexistencia no se hace alegación y en la Mesa de Corbelle (Sección 5.ª), se da por válido el certificado de escrutinio remitido por la Mesa electoral y firmado por el Presidente, adjuntos e interventores, por lo que resulta acreditada la votación, (b) la falta de coincidencia de datos en las actas se refiere a cuatro Mesas, en las que se denuncia la no coincidencia de los votos emitidos en total con los atribuidos a cada Partido más los votos en blanco o nulos, pero cabe observar que esta falta de correspondencia posiblemente debida a error puramente material en el recuento de votos es imputable a todos los intervinientes en la Mesa entre los que figuran también los Interventores y como ocurre en Beariz (una de las cuatro Mesas) asiste el Interventor del Partido recurrente, que por tanto al presenciar la votación y no denunciar ninguna infracción contra la pureza del sufragio y sí tan solo la no coincidencia señalada abona la presunción de tratarse de simple error de cuenta que como dispone el C. Civ., en su art. 1266 sólo da lugar a su corrección, que al no señalarse exceso en los votos atribuidos a ningún Partido sólo puede afectar a la suma total de los votos, (c) se denuncia también la no coincidencia de los votos para Congreso y Senado en cuatro Mesas, que hay que atribuir igualmente a simple error de cuenta, pero que no desvirtúa la validez de los sufragios computados sobre los que no se alega ninguna causa de nulidad intrínseca, y finalmente (d) la no consignación del número total de votos en una sola Mesa es una irregularidad que no vicia el procedimiento ya que no puede alterar el resultado de los votos válidamente emitidos.

CDO.: Que en cuanto a la otra impugnación formulada por don Luis María Villarino Sánchez en su nombre y en representación de «Alianza Nacional 18 de julio» formalizada mediante escrito de fecha 28 junio 1977 en cuyo suplico se pide en primer término la nulidad de los actos jurídicos de la Junta Electoral Provincial en relación con las elecciones al Senado por infracción en lo que respecta al recurrente de todas las normas al respecto y especialmente del Fuero de los Españoles, ya que según expone en los hechos la Sala jurisdiccional de la Audiencia Territorial de Orense declaró nulo el acuerdo de la Junta Electoral Provincial que denegó al recurrente su proclamación como candidato al Senado por lo que el día 1.º de junio último el recurrente suplicó de la Junta la retroacción del proceso electoral al momento en que se había producido la nulidad, siendo denegada esta petición por razón de incompetencia de la Junta para resolverla, argumentando sobre la necesidad de esta retroacción en el presente recurso al que se opone tanto el M.º Fiscal como el representante del Partido Unión Centro Democrático, quien en primer lugar invoca su inadmisibilidad, cuestión previa al examen de esta impugnación.

CDO.: Que frente a la negativa de la Junta Electoral Provincial de Orense para la retroacción de todo el proceso electoral como pretendía y pretende el recurrente éste pudo haber interpuesto recurso contencioso - electoral ante la Audiencia Territorial ya que afecta a la proclamación de candidaturas del Senado, competencia específica de la misma, mientras que la Sala 3.ª de este Alto Tribunal sólo es competente cuando se trate de impugnar la validez de la elección y proclamación de Diputados y Senadores electos conforme a la delimitación de competencias que realiza el art. 73 del R. D.-Ley, y es evidente que cuando se le denegó por la Junta la retroacción del proceso electoral el recurrente pudo haber interpuesto nuevo recurso contencioso electoral ante la misma Audiencia Territorial o promover, en su caso la ejecución de sentencia ante la misma, por lo que siendo el motivo de la impugnación un acto de la Junta Electoral anterior a la elección que no consta haya sido recurrido en forma, es en todo caso incompetente esta Sala para conocer del presente recurso conforme al art. 82-a) de la Ley de esta Jurisdicción de aplicación subsidiaria conforme al art. 73-1 del R. D.-Ley, así como a tenor del art. 74.6 del mismo R. D.-Ley.

CDO.: Que por las razones expuestas procede la declaración de inadmisibilidad respecto al recurso interpuesto por don Manuel Cortiñas Pérez como representante de la Candidatura al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista Obrero Español en el mismo Distrito de Orense contra la validez de la elección y proclamación de algunos candidatos electos en dicho Distrito.

CDO.: Que en cuanto a las costas procesales, por aplicación de lo dispuesto en el art. 73-7 del R. D.-Ley 20/1977, procede su imposición a cada uno de los dos recurrentes de las que respectivamente hubieran causado, al ser desestimados íntegramente sus recursos.

S. 21 julio 1977. Contencioso-electoral. (Sala 3.ª). Elecciones: Senado: Principio de conservación del acto: vicios que no alteran el resultado electoral. Fuerteventura.

Disposición estudiada: arts. 73-7.º y 75-4.º del R. D.-Ley 18 marzo 1977.

La representación de la candidatura de «Unión de Centro Democrático» interpone recurso contencioso - electoral, impugnando la validez de la elección y proclamación de don Miguel C. C. como Senador electo por el Distrito de Fuerteventura.

El T. S. desestima el recurso, imponiendo las costas a la parte recurrente.

Ponente: Excmo. Sr. D.: Enrique Amat Casado.

CONSIDERANDO: Que interpuesto el presente recurso contencioso-electoral a nombre de la Can-

3346

didatura presentada por la «Coalición electoral Unión de Centro Democrático» en impugnación de la validez de la elección y proclamación de don Miguel C. C., como Senador electo por la Isla de Fuerteventura, el tema decisorio que se propone a la Sala en la controversia litigiosa mantenida entre la coalición recurrente y la Candidatura para el Senado por la expresada Isla, propuesta por «Asamblea Mayorera (Agrupación de Electores)», —tema que se circunscribe por tanto a determinar, si es válida o nula la elección de referencia en una concretísima mesa electoral: la de Villaverde, término municipal de La Oliva, Distrito único, Sección 2.ª, mesa única— aparece diversificado en estos puntos fundamentales: A) minoría de edad, del adjunto segundo de la mesa don Juan de León Figueroa, como nacido en noviembre 1956; y B) conducta intencionalmente dilatoria del Presidente de la misma, quien mediante suspensiones y obstaculizaciones diversas causó la imposibilidad de que 637 electores ejerciesen su derecho al voto.

CDO.: Que aunque el principio de facilitar a los interesados en un expediente las alegaciones y justificaciones en pro de sus pretendidos derechos, constituye una norma fundamental de todo proceso, es indudable que la aplicación de tal principio no debe hacerse con criterio tan formalista, que sin tener en cuenta la trascendencia de la infracción de la referida norma, se estime siempre defecto esencial determinante de nulidad la omisión de cualquiera de los requisitos propios del expediente, y ello por dos razones: 1) **en primer lugar** y «en términos generales» porque este Alto Tribunal tiene reiteradamente declarado —SS. entre otras de 10 noviembre 1958 (R. 3537), 19 diciembre 1959 (R. 4694), 26 febrero 1960 (R. 1354), 14 octubre 1964 (R. 4241), 24 junio 1966 (R. 3421), 20 enero 1967 (R. 19), 22 febrero 1968 (R. 701) y 17 febrero 1969 (R. 737)— que «toda decisión de la expresada nulidad debe ir siempre precedida de un examen de las consecuencias que haya podido producir la omisión de lo establecido por la Ley, y sobre todo lo que hubiera podido variar el acto origen del recurso en caso de observarse aquello, para evitar por un principio de economía procesal una duplicidad innecesaria de procedimientos»; 2) **en segundo lugar** y por lo que concretamente atañe al procedimiento de litis, porque como acertadamente se expresa por la propia representación de la Candidatura que acciona, en su escrito de alegaciones de 12 julio 1957, y claramente se deduce de lo dispuesto en el último párrafo del art. 75, núm. 4.º del R. D.-Ley 20/1977, de 18 marzo (R. 612) sobre «Normas Electorales», **en el recurso contencioso-electoral para las primeras legislaturas rige, —y por cierto con gran despliegue de eficacia— el referido «principio de conservación del acto», principio que responde a elementales consideraciones de buen sentido, pues si lo que importa es impedir el falseamiento de la voluntad popular, resulta claro que aunque existan infracciones, si éstas no falsean los resultados electorales, tampoco puede haber nulidad, como así se establece en el propio texto legal al aludir a cuando el vicio de procedimiento electoral «no fuera determinante del resultado de la elección» y cuando la invalidez de la votación en una o varias Secciones no alterase el resultado final.**

CDO.: Que consciente de ello, la representación de la candidatura recurrente, invoca la existencia de un determinado número de personas, privadas de su derecho al voto, con la incorporación de varios pliegos en los que se recogen firmas y se hacen referencia a números determinados de documentos nacionales de identidad, del orden de 318 firmas o referencias como recoge en su informe el M.º Fiscal.

CDO.: Que en este procedimiento, es a este dato objetivo, ofrecido, repítase, por la propia parte a quien perjudica, a lo que habrá de estarse, en justicia, y no al núm. 637 antes expresado, que contradice sus propios actos; y no sólo porque es el que corresponde al momento, en que, vivo todavía el problema, era posible contar a las personas que quedaron, realmente, sin votar, sino por ser, el que,

además, coincide, en sustancia, con lo que se hace constar, el mismo día de la elección, en el acta de la reunión celebrada por la Junta de Zona de Interventores, es a saber: que por parte del candidato don Hilario Estévez Morera, se manifiesta, «que en la Sección 2.ª del Municipio de la Oliva, no pudieron votar alrededor de 300 personas.

CDO.: Que teniendo esto en cuenta, y aún dando por bueno, que entre esos 318 votos, no existieran algunos, nulos o en blanco, o en favor de otro cualquiera de los candidatos, que no fuera el señor E. M. —lo que no es fácil admitir en buena lógica— mal se puede sostener que el presente caso ha sido alterado el resultado final de la elección, porque adicionando estos 318 votos, que dícense impedidos o nonatos, a los 2.600 que posee el mencionado señor E., el total de los que así resultarían atribuidos al mismo, serían, salvo error u omisión de 2.918, inferior, por tanto, en 264 a los logrados por el electo don Miguel C., que, es sabido, obtuvo 3.182 votos; y si a ello se añade que la presencia en la mesa de su adjunto 2.º tampoco influyó en el resultado electoral ya que ni siquiera pudo emitir su voto por haberse advertido su minoría de edad —en unos meses— al final de la elección, cuando, de conformidad con la Ley, procedían a votar los miembros de la mesa; claro es que por todo lo expuesto consecuentemente procede la desestimación del presente recurso, con imposición de costas a la parte recurrente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 73 núm. 7.º del calendario Decreto-Ley.

S. 22 julio 1977. Contencioso-electoral. (Sala 3.ª). Elecciones: Congreso y Senado: vicios que no alteran el resultado; apoyo de varios partidos a candidato único; escrutinio: principio de unidad de acto. Santa Cruz de Tenerife. 3347

Disposición estudiada: R. D.-Ley de 18 marzo 1977.

Las representaciones de «Alianza Popular» y «Unión de Centro Democrático» interpusieron recursos contencioso - electorales, impugnando la elección y proclamación de candidatos al Congreso y al Senado por el Distrito de Santa Cruz de Tenerife.

El T. S. desestima los recursos y declara la validez de las elecciones impugnadas, imponiendo las costas a los recurrentes.

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Holdán Martínez.

CONSIDERANDO: Que son tres los recursos contencioso-electorales tramitados en el presente procedimiento electoral de urgencia, el primero de ellos interpuesto por la Federación de Asociaciones Políticas «Alianza Popular», impugnando la validez de la elección y consiguiente proclamación de Senador electo por el Distrito insular de La Palma, el segundo interpuesto también por la misma Federación de Partidos Políticos «Alianza Popular», impugnando la elección y consiguiente proclamación de Diputados al Congreso por el Distrito de Santa Cruz de Tenerife y, el tercero, interpuesto por doña María Dolores Pelayo Duque, representante de la coalición electoral «Unión Centro Democrático», ante la Junta Provincial electoral de Santa Cruz de Tenerife impugnando el escrutinio general efectuado por la expresada Junta Provincial, en el extremo referente a los votos no computados emitidos por los electores, tanto para el Congreso como para el Senado, correspondientes a las Mesas electorales de las Secciones, Distrito y términos municipales que se indican en el cuerpo del escrito de interposición, interesando sentencia por la que se declaren computables los votos emitidos por los electores de las citadas Mesas electorales para ser sumados, los otorgados a favor de dicha coalición a los que tienen otorgados en el Acta de escrutinio; recursos los tres que fueron remitidos a esta Sala acumulados y que a fin de evitar dilaciones en la tramitación, dado el carácter urgente que el R. D. de 18 marzo último (R. 612) señala para esta clase de recursos y no afectar la acumulación a las

requisitos, que la Junta debe ponderar en cada supuesto, como lo demuestra la expresión «podrá» empleada en el precepto que tienen el alcance de proporcionar a la Junta poderes discrecionales para no admitirla en el supuesto de que su admisión afecte a la validez esencial del acto de escrutinio, por lo que estando presidido el acto del escrutinio general por el principio de la unidad y no interrupción del acto, para que este principio proclamado en el Real Decreto-Ley electoral no se quebrante es claro que para que sea admitida la Certificación que supla el Acta de ser presentada a medida de que se vayan examinando los sobres de las correspondientes Secciones, o sea, en el momento de la apertura de los sobres pertenecientes a las Mesas de las diferentes Secciones en que faltó el Acta pero no después de verificado el escrutinio, pues, ni existe precepto alguno que autorice a la Junta paralizar o interrumpir el escrutinio y volver atrás, antes por el contrario, el núm. 5.º del art. 68 dispone que el acto del escrutinio general no podrá interrumpirse y, en el caso que aquí se debate, aparece acreditado por el Informe emitido por la Junta provincial, sin contradicción, que en las Mesas que se expresan y sobre las que versa este recurso, el Certificado referente a las citadas Mesas fue presentado después de hecho el escrutinio de las mismas cuando ya no era viable volver atrás en el desarrollo de ese acto sucesivo que no admite interrupción.

CDO.: Que por disposición legal procede hacer especial imposición de las costas de este recurso.

3348

S. 21 julio 1977. Contencioso-electoral. (Sala 3.ª). Elecciones: Congreso y Senado; legitimación activa; listas que no obtengan el 3% de los votos; desviación de poder; inexistencia. Madrid.

Disposiciones estudiadas: art. 83-3 de la Ley Jurisdiccional; R. D.-Ley 18 marzo 1977.

La representación del «Partido Independiente» interpone recurso contencioso - electoral impugnando la validez de la elección y proclamación de Diputados y Senadores por la provincia de Madrid.

El T. S. desestima la alegación de inadmisibilidad opuesta por el M.º Fiscal, y desestima asimismo el recurso, imponiendo las costas a la parte recurrente.

Ponente: Excmo. Sr. D. Isidro Pérez Frade.

CONSIDERANDO: Que previamente al estudio de las alegaciones del escrito de demanda del presente recurso contencioso electoral interpuesto ante la Junta Electoral Provincial de Madrid, por don Antonio Adolfo S. F., como representante legal de la candidatura núm. 22 del «Partido Independiente de Madrid», y remitido posteriormente a esta Sala, en virtud de lo ordenado en los arts. 74 y 75 del R. D.-Ley de 18 marzo 1977 (R. 612), sobre normas electorales, se hace preciso examinar lo que de forma somera es simplemente enunciado en el preceptivo informe emitido por el M.º Fiscal, alegaciones 3.ª núm. 2 y 5.ª, párr. 4.º de su escrito, pero que de forma procesal definitiva se plasma en su Suplico, esto es la petición de inadmisión total del recurso con fundamento en los enunciados antedichos, respecto a una supuesta falta de legitimación procesal activa en la parte recurrente.

CDO.: Que la legitimación procesal, bien esté vinculada a la titularidad de un interés directo o a la de un derecho derivado del ordenamiento que se considera infringido, conforme a lo que a tal efecto dispone la Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa (R. 1956, 1890 y N. Dicc. 18435), aplicable como subsidiaria, al Decreto de las normas electorales, tiene, aparte del concepto jurídico antedicho una incidencia específica, no sólo en los arts. 3.º y siguientes Disposiciones Generales de las referidas normas, sobre personas elegibles, sino aún más en el núm. 3 del art. 73 de ellas, al establecer que están legitimados para interponer el recurso contencioso electoral correspondiente los representantes de las candidaturas proclamadas o concurrentes en el Dis-

trito, por lo que al tener esta cualidad el Partido denominado Independiente, hoy recurrente, no puede en principio alegarse una falta de legitimación, sólo en base de hacer un supuesto real de aquello que precisamente se discute, esto es del número de votos válidos o no válidos obtenidos por tal candidatura, una vez hechas las confrontaciones correspondientes por la Junta Electoral Provincial, que es precisamente lo que constituye el fondo propiamente dicho de la cuestión debatida por todo lo cual no cabe sino desestimar la alegación de inadmisibilidad solicitada por el M.º Fiscal.

CDO.: Que respecto a tal fondo del asunto, de la prueba aportada al recurso, singularmente del contenido del acta de fecha 21 junio 1977 levantada por la Junta Electoral Provincial, con singular extensión, se desprende, al par de otras cuestiones esclarecedoras de los supuestos defectos de procedimiento y formalización de la candidatura impugnante y que rebaten éstos, un hecho inconcuso cual es el de que el número de votos deducidos del recuento hecho por la Junta Electoral mencionada y atribuidos al Partido ahora recurrente, alcanza la cifra de 4.397, mientras que el total de votos declarados válidos en su totalidad, fue el de 2.320.875, y si conforme a las propias alegaciones del recurrente en su escrito correspondiente, de cada cinco votos le fueron eliminados cuatro, en el caso más favorable de apoyo a su argumentación, la quinta parte de los obtenidos, quinta parte que suponen los 4.397, multiplicados por cinco daría un total de 21.825, cifra incluso inferior a la señalada por el M.º Fiscal, y desde luego muy inferior al 3% exigido por el ap. b) del art. 21 (quiere decir veinte) de las normas electorales, por lo que en definitiva se hace procedente la desestimación de la petición de declaración de nulidad de la elección celebrada en el Distrito de Madrid, que constituye la esencia del Suplico de la demanda del recurso.

CDO.: Que como consecuencia de todo ello y de la real falta de comprobación de existencia de daños y perjuicios que pudiera dar lugar a la solicitada indemnización de 15.000.000 de ptas. no es procedente la misma ni puede tampoco argumentarse con éxito la alegación de desviación de poder, por cuanto esta supone, conforme al art. 83 núm. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el Ordenamiento jurídico, mientras que en el presente recurso tal desviación es sólo esbozada en el mismo sin que de toda la prueba aportada al proceso se derive extralimitación alguna que pudiera ser siquiera indicio del ejercicio abusivo de potestades.

CDO.: Que por lo expuesto procede la desestimación total del recurso interpuesto con expresa imposición de costas, de acuerdo con lo establecido en el núm. 7 del art. 73 del Real Decreto Ley sobre normas electorales.

S. 22 junio 1977. MILITAR. Procedimiento: defectos intrascendentes. Cohecho: función pública. Estafa: cuantía; falta; prescripción.

3349

Preceptos estudiados: Código de Justicia Militar arts. 194 núm. 4 párr. 2.º y C. P. arts. 113, 388 y 587 núm. 3.º.

El primer resultando de la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar declara probado que en el intervalo de tiempo que comienza no más tarde de 1955 y que se prolonga hasta el año 1966 inclusive, mozos reclutas o soldados de los Municipios de las Provincias de Ciudad Real y Toledo que detalla y aunque pudiendo asegurarse que en total excedían de 100, obtuvieron la clasificación de excluidos para el servicio de las armas por inutilidad física mediante simulación de enfermedades cerebrales, visuales y de corazón, que les fueron dictaminadas unas veces deliberadamente por el Coronel procesado don Rafael B. M., entonces Teniente Coronel Médico, Jefe de los Servicios de la Clínica de Oftalmología del Hospital Militar G. y otras mediante alteraciones sustanciales en los ex-